

LA MASACRE DEL VALLE
El desencuentro militar – campesino

Roberto Laserna

Ediciones CERES

1994

CERES agradece la cooperación de SAREC a su programa de publicaciones y a sus actividades de investigación en ciencias sociales.

Depósito Legal N° 1-1-96-91

Edición 500 ejemplares

CERES

Casilla 949

Fax (42) 32310

Cochabamba - Bolivia

Composición, diagramación e Impresión

Ed. Arol <197> ODEC

Teléfono 40572

Casilla 3419 - Cochabamba

Enero, 1994

Impreso en Bolivia

PRESENTACION

Han pasado dos décadas desde que se produjo el trágico equívoco que culminó con la masacre del Valle. Al publicar este breve estudio de aquella coyuntura, el CERES no tiene otra intención que la de contribuir a mantener viva la memoria colectiva de los bolivianos. No para juzgar el pasado ni a sus protagonistas, sino para comprenderlo mejor y aprender de los errores que cometimos. Esperamos cumplir este objetivo no solamente difundiendo este tipo de trabajos, sino fundamentalmente avivando el debate y la reflexión sobre temas, hechos y problemas que han marcado nuestros comportamientos sociales. Este trabajo formó parte de un estudio mas amplio sobre "Crisis de Mercado y Conflictos Sociales en Cochabamba", que además de analizar los eventos ocurridos en Enero de 1974, estudió también las movilizaciones sociales de Diciembre de 1979 y de Marzo de 1982 en rechazo a las políticas diseñadas por los gobiernos de Lidia Gueiler y Celso Torrelio respectivamente. Aquel estudio fue concluido a fines de 1982 en el marco de un Programa conjunto de la Universidad de York (Toronto) y FLACSO (Quito), del que participó CERES.

Del informe final elaborado entonces se han extraído las secciones correspondientes a la Masacre del Valle, y se publican sin mayores correcciones que las necesarias para darle continuidad al texto

Es de esperar que esta publicación estimule la realización de nuevas investigaciones sobre aquellos hechos, y provoque en sus protagonistas la necesidad de difundir su versión sobre los mismos. Nunca ganaremos el futuro si sentimos temor a enfrentar nuestro pasado.

Cochabamba, Enero de 1994

1.- La parcela y el Estado del 52

Si un solo aspecto fuera capaz de definir la naturaleza de un proceso social complejo, la reforma agraria bastaría para comprender la Revolución Nacional iniciada en 1952.

Como propuesta programática la Reforma fue incubada a lo largo de varios decenios de luchas y conflictos campesinos, conquistando a paso lento pero seguro la adhesión de los explotados del agro. La parcela fue la concretización de un auténtico programa transformador, porque fue social e históricamente construido por las masas campesinas en su movilización y en su vinculación con diversas élites políticas e intelectuales.

No faltan quienes, disconformes con el resultado concreto de las sublevaciones campesinas, atribuyen a la supuesta voluntad "pequeño burguesa" de la dirigencia "movimientista" la generalización de la pequeña propiedad en el agro boliviano. Tal versión no solamente niega la fuerza social contenida en el campesinado de entonces, sino que imagina una inverosímil capacidad de control estatal sobre la sociedad en un momento caracterizado, precisamente, por el absoluto predominio de ésta sobre aquél.

En efecto, la insurrección de Abril rompió el espinazo del ya debilitado estado oligárquico al vencer militarmente al ejército, y permitió, seis meses más tarde, la disolución de las bases económicas del poder oligárquico con la nacionalización de la minería del estaño. Una sociedad en tan intenso movimiento no era simplemente una sociedad agitada y caótica en la que cualquier iniciativa, con tal de ser organizada, pudiera prosperar. Tenía su propia dinámica y su propia orientación porque no había sido el invento de una cúpula inteligente y activa sino la culminación de un largo y penoso proceso histórico.

Que la revolución nacional haya sido conducida por una élite "pequeño burguesa" no necesariamente quiere decir que ésta fuera capaz de imponer su programa sino, por el contrario, es más probable que éste, que tenía un origen social e histórico (insistimos), hubiera requerido y encontrado una dirigencia capaz de corresponderle y desarrollarlo.

Todo esto es claramente perceptible cuando se estudia la reforma agraria. Sus propios líderes han enfatizado siempre las enormes diferencias entre el proyecto de reforma agraria que el MNR deseaba poner en marcha y la reforma que ejecutaron las "descontroladas" masas campesinas.

La región de Cochabamba, ya lo dijimos, fue el más importante escenario de todo este proceso.

No solamente porque fue en ella donde se desarrolló con más intensidad, sino porque, de alguna manera, fue en ella donde nació y se construyó el programa concretizado en la parcela. No debe olvidarse que el primer sindicato campesino del país nació en los valles cochabambinos (Dandler 1984) y fue en ellos donde se firmó el decreto que legitimaba jurídicamente los hechos ahí producidos, reconociéndolos como modelo y dándoles una cierta validez nacional. La reforma agraria boliviana se hizo a imagen y semejanza de las conquistas logradas por el Sindicato de Ana Rancho, y éstas consistieron en hacer un piquero independiente de cada colono explotado.

Con su mera existencia, la parcela (la piquería) tuvo un poder ideológico inmensamente superior al de cualquier discurso político. Era la única alternativa cuya factibilidad había sido comprobada, y encarnó vigorosamente la vaga fórmula de "la tierra para el que la trabaja". El campesinado parcelario de Cochabamba luchó para ser tal y su lucha lo extendió como clase generalizando y profundizando sus características fundamentales por gran parte del agro boliviano. Y ésta fue la transformación social más importante del proceso revolucionario de los años 50.

Los valles de Cochabamba son, pues, el núcleo histórico y político del campesinado parcelario y ningún esquema de gobierno surgido después de 1952 lo ha podido ignorar sin sufrir las consecuencias.

El MNR permaneció en el gobierno aún mucho después de que se quebrara la alianza que sustentó su ascenso porque contó con el apoyo del campesinado, la clase más numerosa del país. Y si cayó en 1964 fue más por su propia descomposición interna que por la fuerza de una oposición organizada. Lo prueba el hecho de que el gobierno Barrientos, que le sucedió, no sólo impulsó una política que era continuación de la propuesta por Paz Estenssoro, sino que rigió su sistema de dominación política sobre los mecanismos de mediación y violencia ya existentes. Mecanismos a los cuales, por lo demás, no era ajeno el ejército ni el propio Barrientos.

Aunque los esfuerzos de contención y desarticulación del movimiento popular databan del período de gobierno de Siles Suazo (1956- 1960) e incluso antes, fue durante el segundo

gobierno de Paz Estenssoro cuando se intentó construir un sistema político relativamente estable. El discurso oficial se planteó en torno a la necesidad del desarrollo económico, en un esfuerzo seguramente tendiente a transformar el economicismo defensivo y corporatista a que habían sido conducidas las masas urbanas por la crisis, en un economismo de apoyo y base de consenso. Por otro lado, quizás ante la evidencia del desgaste del MNR, se otorgó preponderancia a las Fuerzas Armadas como articuladoras de la acción estatal. Después de su reorganización, en 1956, su presencia en la escena social fue crecientemente requerida por el Poder Ejecutivo, y poco a poco el moderno ejército fue convirtiéndose en el árbitro de las luchas sociales, en la representación del Estado en las regiones periféricas y en el principal brazo ejecutor del proyecto desarrollista y de las necesidades del gobierno.

Todo parece indicar que, consciente o inconscientemente, Paz Estenssoro buscaba sobre la base del apoyo consensual al desarrollo económico y de la organicidad (represiva) de las Fuerzas Armadas, abrir el espacio necesario para la centralización del poder. Pero fue Barrientos quien lo aprovechó, profundizando y consolidando el esquema autoritario y personalista que perseguía Paz Estenssoro en su momento.

Para lograrlo, Barrientos diferenció claramente las relaciones entre el aparato represivo que comandaba y los distintos sectores sociales. Abiertamente represivo contra obreros e intelectuales, su objetivo fue la despolitización y desarticulación del movimiento popular urbano. Su relación con las capas medias fue, sobre todo, de naturaleza burocrático-clientelar, logrando en ellas una suerte de consentimiento pasivo sólo ensombrecido a veces por reivindicaciones económicas. Pero fue en el campesinado parcelario donde alcanzó un auténtico éxito político logrando incluso institucionalizar la presencia mediadora represiva del ejército con el Pacto Militar Campesino.

El fenómeno no era nuevo. Hegel anotó ya el papel político desempeñado por los propietarios rurales (Cf. Bartra 1978; 40 y ss), considerando a la clase intermediaria por excelencia, capaz de revestir y encubrir la dominación política de minorías autoritarias. Por su parte, estudiando el proceso político francés, Marx sostuvo que "la influencia política de los campesinos parcelarios encuentra su última expresión en el hecho de que el Poder Ejecutivo someta bajo su mando a la sociedad" (1978; 130), y que "la propiedad

parcelaria se presta por naturaleza para servir de base a la burocracia omnipotente e innumerable" (ibid, 135). El elemento burocrático del MNR fue sustituido por un elemento mucho más confiable para defender la propiedad de la parcela: el ejército. El periodo de Barrientos es, en este sentido, una nueva comprobación histórica de la hipótesis sobre el rol político del campesinado parcelario. Tuvo, sin embargo, un "mérito" adicional. Si bien desarrolló una relación caudillista con el campesinado (siendo su representante aparecía "al mismo tiempo como su señor, como una autoridad por encima de ellos, como un poder ilimitado de gobierno que los protege de las demás clases y les envía desde lo alto la lluvia y el sol", como señala Marx en su caricatura del Bonaparte "campesino" (1978; 130); lo hizo presentándose siempre como la encarnación del orden y la organización militar logrando, en cierto modo, que la institución en su conjunto heredara por lo menos la posibilidad de continuar esa relación después de su muerte. Ya al salir del cementerio donde enterraron a Barrientos, el Gral. Ovando fue proclamado "líder máximo de los campesinos", como lo fueron después casi todos los presidentes militares.

Múltiples mecanismos han reforzado este comportamiento. El servicio militar obligatorio, constituido en el "rito de iniciación" por el que los campesinos se "hacen hombres" (machos y ciudadanos), convierte la subordinación en una virtud y los galones en la medida de la infalibilidad. La misma escuela, aún sin proponérselo, circunscribe la imagen de la patria y de lo patriótico a los símbolos y las estructuras de la institución militar.

El Pacto Militar Campesino no fue, pues, una imposición arbitraria. Tenía raíces para afirmar una forma de Estado socialmente basado en la población campesina, aún cuando desarrollara acciones incluso contrapuestas a los intereses campesinos.

FOTO NUMERO 1

Uno de los efectos más perceptibles del Pacto fue la desarticulación horizontal del campesinado, impidiendo una fluida comunicación al nivel de las bases y por tanto una actuación unitaria de las mismas. Estas, sin embargo, lograron conservar ciertas características de sus organizaciones primigenias. Los sindicatos campesinos de base no

fueron nunca organizaciones exclusivamente gremialistas, si no que se plantearon como estructuras comunitarias de poder y autoridad popular, superponiéndose en muchos casos a las formas tradicionales de liderazgo. El Pacto Militar Campesino incorporó en el aparato burocrático del Estado, a los dirigentes nacionales y regionales reconocidos, y al formalizarlos como interlocutores coadyuvó a la "formación" de su propias bases. Estas, a su vez no sólo se acoplaron a la organización cuya dirigencia se mostraba más capaz de obtener respuestas a sus reivindicaciones (camino, escuelas, títulos, o puentes, etc.) sino que buscaron ampliar sus redes de relaciones con otras instancias institucionales (como los centros de residentes urbanos formados por migrantes rurales, o los organismos eclesiales), tornando aún más precarios los lazos clientelares campesinado - Estado. Con esto queremos señalar algunos elementos característicos del Pacto Militar Campesino, a fin de mostrar los límites de su eficacia instrumental y comprender mejor las razones y los caminos de su paulatino desgaste.

Por el momento, sin embargo, interesa retener que la característica básica del Estado que se construyó luego de la revolución de 1952 fue la de tener como base fundamental la propiedad parcelaria, el campesinado independiente. Ello entraba en flagrante contradicción con la orientación general de la política estatal destinada sobre todo a reforzar los ejes del desarrollo del Estado, dándole a éste un carácter transitorio y haciendo cada vez más evidente su "artificialidad".

2.- La masacre del valle

2.1.- Antecedentes del conflicto.

El campesinado parcelario jugó pues un papel importante en la creación del Estado del 52 y tuvo una cierta "participación" en el sistema autoritario de dominación que inició formalmente Barrientos en 1964. Fue sin embargo, durante el gobierno de Bánzer que la orientación general de la política estatal contravino sistemáticamente y con mayor consistencia los intereses parcelarios. El campesinado, salvo cuando se requirió fuerza

de trabajo en las empresas agropecuarias del oriente, o cuando era necesario mantener bajos los precios de los alimentos, fue totalmente ignorado en la política económica.

Esta ha sido globalmente caracterizada como "desarrollista" (Aranibar 1978; Ramos 1980; Blanes 1982) para destacar el énfasis puesto en la aceleración del crecimiento económico como objetivo explícito de la acción estatal y la importancia de ésta como instrumento en la formación de capital y la captación y traslación de excedentes económicos.

En éste marco tuvieron primera prioridad las actividades vinculadas más estrechamente al mercado mundial. La producción exportadora recibió un apoyo prácticamente ilimitado para su expansión : créditos baratos, imposición tributaria meramente ornamental en el caso de la agroindustria del oriente, y un sólido y consistente presionar tendiente a garantizar la necesaria disponibilidad de fuerza de trabajo en precio y cantidad aceptable para el productor agroindustrial. En los rubros de exportación más controlados por el Estado (minería e hidrocarburos) se trató de aprovechar sin medida ni previsión alguna al extraordinario aumento de los precios en los mercados internacionales, debilitando al mismo tiempo a las empresas públicas del sector con una fuerte carga tributaria (Laserna 1980). Si a esto añadimos información sobre el desmedido e irresponsable endeudamiento público tanto externo como interno, no podríamos sorprendernos saber que la capacidad del gasto fiscal se incrementó en un 875.8 por ciento entre 1972 y 1978, y que la inversión pública representó una proporción superior al 70 por ciento durante el período. Lo que sí podría sorprender es que sólo una ínfima parte de todo ese esfuerzo fuera destinado a respaldar las actividades de la agricultura parcelaria. Así por ejemplo, de los casi 3.400 millones de dólares en que consistía la deuda externa contratada a mediados de 1979, menos del 2 por ciento había sido directamente destinada al sector agropecuario "tradicional ". Esta proporción puede haber sido mayor pues parte de la deuda destinada al sector agropecuario (tradicional y moderno) no tenía determinado su destino. Sin embargo, el contraste sigue siendo muy notorio cuando se sabe, por otro lado, que el sector del transporte fue destinatario del 26 por ciento de la deuda externa contratada (Cf. Navia 1982 ; 196 y ss).

Adicionalmente, la política económica buscó establecer las condiciones adecuadas para atraer inversiones extranjeras. La devaluación del peso boliviano en 1972 y el inmediato congelamiento de salarios acrecentaron el potencial explotador del capital internacional que, aún así, se mostró reacio a invertir en Bolivia. Fue un enorme sacrificio el que se impuso a la clase obrera, cuyos salarios reales fueron persistentemente comprimidos, y al mismo campesinado que debió soportar un rígido control de precios sobre sus mercancías.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, durante el periodo, fue de aproximadamente el 30 por ciento, (Cf. COB 1979; p. 16 y anexos). Los precios de los productos campesinos se deterioraron, en relación al índice general de precios, en un 32.3 por ciento entre 1972 y 1975. (Datos del MACA y del Banco Central de Bolivia).

Las consecuencias de semejante política económica no se dejaron esperar. Ni el auge de los precios internacionales ni los desembolsos de la deuda externa pudieron impedir un creciente desequilibrio en la Balanza de Pagos, así como tampoco evitaron que el déficit fiscal creciera sistemáticamente alimentando la expansión del medio circulante y el consiguiente desequilibrio en el sistema de precios.

Las crisis de mercado se sucedieron con frecuencia haciéndose cada vez más difícil para el régimen contener el conflicto social que late en cada crisis. Es posible que la más importante, en términos cuantitativos, haya sido la provocada por la devaluación del peso boliviano en Octubre de 1972; pero la que mayor significación social adquirió fue la de enero de 1974, ahí, la crisis fue el detonante de un conflicto extenso y profundo que sacudió las bases mismas del Estado y del régimen autoritario.

2.2 El desencuentro de enero

Luego de la devaluación de octubre de 1972 que fijó el tipo de cambio en 20.4 pesos por dólar (66.66% más alto que el anterior), el gobierno congeló los salarios luego de otorgar un bono de compensación equivalente a menos de 7 dólares mensuales (135. \$b.), pero no pudo controlar un agudo proceso inflacionario por el cual los precios al consumidor aumentaron lo que no habían aumentado en los cinco años anteriores. Doce meses

después, el gobierno volvió a autorizar un importante incremento en los precios de los artículos de primera necesidad, disponiendo el control de precios en los mercados de consumo y dejando a la negociación dentro de cada empresa el monto de un bono compensatorio al alza de costo de vida para los trabajadores asalariados. En la práctica, el par metro de las negociaciones fue el monto concedido a los empleados públicos, equivalente a 6 dólares (\$b. 120).

Con esas medidas, el gobierno afirmaba su intención de restablecer el equilibrio en el mercado combatiendo la especulación y el contrabando que era estimulado por las diferencias de precios de dichos artículos en Bolivia y los países vecinos. Simultáneamente, anunciaba su decisión de ceder a presiones de la opinión pública convocando a elecciones generales para el primer domingo de mayo de 1975.

Vanos fueron, sin embargo, los esfuerzos del régimen. El año 1974 comenzó registrando cotidianamente un creciente malestar en la ciudadanía. "Abundancia de comités y escasez de alimentos" fue un expresivo titular informativo (LT; 8.1.74). Un dirigente campesino, que poco después sería elegido Secretario Ejecutivo en el Congreso Departamental de Paracaya, se quejó por la carestía de alimentos en el agro afirmando que de no asegurarse una previsión normal "los campesinos, como represalia ante la carestía, (podría darse que) no trasladen productos agropecuarios a los mercados de la ciudad" (LT; 5.1.74). Era el lenguaje de la impaciencia que comenzaba a asomar.

En realidad, a lo largo de todo el mes fue aumentando la inquietud y el malestar social, haciéndose cada vez más intensas las protestas y más rígidas las opiniones.

El 8 de enero el gobierno expulsó del país a Víctor Paz Estenssoro, acusado de complotar contra su estabilidad, logrando al mismo tiempo la permanencia de su partido en el frente político que apoyaba a Bánzer. Tres días después, una manifestación de obreros de la fábrica MANACO fue reprimida en Quillacollo, a 15 Km. de Cochabamba, cuando protestaba contra la carestía de alimentos y la ineptitud municipal para controlar la especulación. Ese mismo día, un ampliado de dirigentes del autotransporte resolvió exigir un incremento del 200 por ciento en las tarifas y fletes. También por esas fechas, una comisión de dirigentes campesinos recientemente designados en Congreso Departamental viajó a La Paz para hacer conocer al gobierno sus planteamientos

económicos inmediatos. En los medios informativos se insinuaba que "de continuar la desatención del gobierno a planteamientos concretos de los campesinos, éstos optarían por desligarse de todo compromiso o pacto de carácter político o de apoyo incondicional" (Cit. LT, 19.1.74). Esta versión fue ratificada por un ampliado departamental campesino en el que, entre otras cosas, se discutió la necesidad de establecer plazos para obtener respuesta del gobierno a sus pedidos, acordando medidas de hecho en caso de que éste persistiera en su actitud indiferente. Algunos participantes denunciaron en el ampliado que dirigentes nacionales recibían sueldos del gobierno por ejercer esas funciones. Dudando de la sinceridad del régimen, autorizaron a su Secretario Ejecutivo a viajar a La Paz donde había sido llamado por Bánzer, pero acompañado por otros tres dirigentes "por si acaso" LT, 20.1.74).

El mismo día en que los diarios publicaron estas noticias, el gabinete de Bánzer aprobó un conjunto de medidas económicas orientadas a modificar las condiciones de mercado:

- El Decreto 11300 creaba un bono de compensación al costo de vida de 400\$b. mensuales (20 dólares) a todos los trabajadores del sector público y privado;
- El Decreto 11301 creaba un impuesto a la comercialización del arroz y el azúcar en el territorio nacional a fin de desestimular la exportación ilegal de estos productos;

Concomitantemente, el Ministerio de Industria y Comercio emitió su Resolución 15600 por lo cual fijaba un aumento de precios en 6 productos básicos.

- El decreto 11302 por el cual el Estado se constituía en garante de los depósitos en cuenta de ahorro, cuya cláusula de mantenimiento de valor (en la relación de dólares) era en consecuencia respaldada por el Estado.

La preocupación del Gobierno estaba, como se ve, en los mercados urbanos. Estimaba que desabastecimiento se debía a la exportación ilegal de esos productos a los países vecinos, que resultaban favorecidos por la diferencia de cambio, y al ocultamiento especulativo de los comerciantes, de modo que un aumento de los precios estimularía la oferta restableciendo el normal abastecimiento de los mercados. Adicionalmente, para paliar el impacto que tal medida generaría, concedía un aumento salarial y, a través de la alcaldía, disponía un estricto control sobre los precios a fin de que el aumento en el costo de vida no fuera mayor que el "autorizado" por resolución ministerial.

Tales ilusiones se desvanecieron de inmediato pues los aumentos de precios y el bono salarial justificaron nuevas alzas de precios (sobre todo los productos industriales) en tanto que el bono apenas representaba un aumento del 27 por ciento según un estudio de los trabajadores fabriles de La Paz; proporción inferior al aumento del costo de vida ocurrido sólo entre diciembre de 1973 y febrero de 1974, que fue del 30.3 por ciento (Datos del INE).

Quienes más sufrieron el impacto de la crisis de mercado profundizada por el régimen, fueron los pequeños agricultores. Ellos, responsables del grueso del abastecimiento alimenticio(1) fueron presionados de múltiples maneras a continuar soportando el estricto control de los precios de sus productos en el mercado urbano. Obviamente, este control era frecuentemente desbordado y nunca pudo cumplir a cabalidad su objetivo de congelar los precios, pero fue el elemento fundamental que hizo que la posibilidad de conflictos que subyace en el juego de la oferta y la demanda se acentuara en la relación productor - intermediario mucho más que en la relación intermediario - consumidor. Esto explicaría también por qué prevalece más el aspecto conflictivo que el complementario en la relación entre productores e intermediarios en tanto grupos sociales organizados.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones de los sectores cuya posición en el mercado fue bruscamente deteriorada no se dejaron esperar. La mayor parte de las mismas fueron protestas espontáneas protagonizadas incluso por los consumidores en mercados y almacenes, pues la represión a dirigentes políticos y sindicales con que inició sus actividades el régimen se prolongó prácticamente durante toda su vigencia. Sin embargo, los fabriles y los mineros lograron expresar colectivamente su repudio con huelgas y manifestaciones en diversos centros del país. Precisamente, la mañana del 22 de enero los obreros de la fábrica de calzados Manaco (subsidiaria de BATA) abandonaron sus labores para expresar su protesta en una marcha que culminó con la adhesión masiva de la población de Quillacollo, en la Plaza Central de esa ciudad. Poco después, en medio de slogans referidos a sus dificultades económicas, los manifestantes bloquearon la carretera asfaltada que une Cochabamba con Oruro y La Paz. Durante el día las fuerzas represivas intentaron en vano romper los bloqueos. Recién al día siguiente, luego de haber ocupado durante la noche la ciudad, pudieron restablecer el

tráfico vehicular por la carretera. Poco después empero, el comandante de la policía de tránsito fue tomado como rehén junto a cuatro oficiales quedando todos bajo custodia del Sindicato MANACO. Las autoridades se vieron obligadas a negociar un convenio por el cual se comprometieron a desocupar Quillacollo en tanto los trabajadores liberaban a los rehenes y garantizaban el orden público.

Cuando comenzaba a cumplirse el convenio y las fuerzas policiales se retiraban de Quillacollo, nuevos grupos de pobladores, a los que se adhirieron numerosos campesinos de la zona, bloquearon nuevamente la carretera. Sus principales exigencias eran la derogatoria de los decretos recientemente promulgados y el restablecimiento de los antiguos precios de los artículos de primera necesidad. En el hostigamiento que sufrieron los bloqueadores perdió la vida un joven de 18 años por una granada de gas lacrimógeno que recibió en la cara. Ese día, el número de heridos aumentó a 9 (PL; 24.1.74 y APDHB 1979; 15 y 16). Una nueva ocupación armada de Quillacollo durante la noche restableció la calma en esa ciudad.

El día 24, mientras grupos de campesinos comenzaban a cortar el tráfico en la carretera Cochabamba Santa Cruz que cruza todo el Valle Alto, Bánzer ofreció un incremento salarial del 25 por ciento a los trabajadores mineros y el congelamiento absoluto de los precios en sus pulperías. El Ministro del Interior, también en La Paz, amenazó con aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que contemplaba incluso la pena de muerte, para precautelar el orden público. Los Ministros de Agricultura y de Asuntos Campesinos, en Cochabamba, se reunieron en privado con los dirigentes departamentales, quienes convocaron al Ampliado Departamental para el día 30 a fin de escuchar de los Ministros la demostración de que "las medidas beneficiarán a los campesinos". Estos, a su vez, pidieron autorización para aumentar los precios de sus productos a fin de resarcirse de las alzas (LT: 25.1.74).

Para el día siguiente, el bloqueo de la carretera a Santa Cruz se extendió a lo largo de casi 100 km. En una reunión pública realizada en la localidad de Tolata (a 30 km. de Cochabamba), donde se agruparon varios piquetes de bloqueadores para escuchar al Ministro de Agricultura, un dirigente campesino comentó en su discurso en quechua que

con su actitud el Ministro quería seguir "haciendo tragar píldoras cuadradas en el garguero de los campesinos".

Otros expresaron su repudio a los políticos que dividen al campesinado, así como a los dirigentes de la Confederación Nacional cuyas decisiones de consentimiento a la política económica fueron consideradas "a título personal" (LT; 26.1.74).

En La Paz, luego de entrevistarse con el Gral. Bánzer, el Secretario Ejecutivo de la oficialista Federación de Campesinos de Cochabamba, Ciriaco Guzmán, informó a la prensa la lógica simple e irrefutable de sus argumentos. "He venido a Palacio -dijo- porque el Presidente me había hecho llamar para comunicarme que los precios de los productos agrícolas no deben subir (...). Yo he dicho que si los precios de los artículos de primera necesidad suben (...), como el azúcar, la harina, el arroz, carne, también deben subir de precio los productos agrícolas que producimos en el campo" (LT; 26.1.74).

Para el sábado 26, los bloqueos se extendieron aún más abarcando la carretera Cochabamba-Chapare en por lo menos 10 lugares a lo largo de 32 km. Los sindicatos de base comenzaron a mostrar una extraordinaria capacidad organizativa estableciendo turnos de bloqueo entre sus miembros, regulando el abastecimiento y cuidando mucho que nada perturbara el carácter pacífico pero firme de la protesta.

Aunque no faltaban los oradores que en cada reunión sugerían la necesidad de que Bánzer renunciara a la presidencia, los campesinos se mostraron por lo general muy conscientes de la correlación de fuerzas existentes en ese momento. Por ejemplo, fustigaron permanentemente a los partidos y a los políticos, refiriéndose concretamente en numerosas oportunidades a los co-gobernantes MNR y FSB, a quienes acusaban de ser los directos responsables del conflicto con su intromisión divisionista en el campo y la adopción de las medidas económicas, pidiendo al mismo tiempo mayor intervención de las Fuerzas Armadas y un diálogo directo con Bánzer cuya presencia era exigida con insistencia. Con ello, los campesinos demostraban su disponibilidad hacia el poder sugiriendo el camino del reencuentro militar campesino, pero conscientes también de que podían poner algunas condiciones para tal reencuentro. El Frente Popular Nacionalista (formado por el MNR, FSB, y las Fuerzas Armadas) era, en la versión de los campesinos,

el principal obstáculo para un entendimiento entre su sector y el gobierno, que debía ser "directo".

Incapaz de comprender el lenguaje de las sugerencias y absolutamente inconsciente de las bases sobre las que se asentaba el edificio del Estado, el gobierno se mostró obsesionado con el "principio de autoridad". Los bloqueos continuaron durante el domingo 27 y el lunes 28 mientras crecía la preocupación de los pobladores urbanos. Este último día, la ciudad de Cochabamba quedó completamente aislada con el establecimiento de nuevas barricadas en la carretera a Oruro y La Paz. Por la noche de ese día, el gobierno dictó el Estado de Sitio en todo el país . Bánzer lo informó en un violento mensaje a la nación: "Tomo mi lugar -dijo- para dar esta nueva batalla por el sentido nacional (...), a los hermanos campesinos, a los hermanos trabajadores de las ciudades y de las minas, a todos aquellos a los que sorprendidos en su buena fe los están tratando de llevar a la provocación de las fuerzas del orden para convertirlos en carne de cañón, los exhorto a que tomen conciencia de la gravedad de los hechos (...) las órdenes impartidas son terminantes e irreversibles. La actuación ser firme, porque ya no es posible que se confunda el diálogo y la comprensión con la debilidad del gobierno". El conflicto, para el Presidente, quedó definido como una "nueva agresión internacional" LT; 29.1.74 / subrayados nuestros).

Al día siguiente, este lenguaje se tradujo en hechos de plomo y sangre. No obstante que un general cochabambino, Juan Pérez Tapia, Prefecto en la época de Barrientos y conocedor de la cultura y el idioma quechua había sido designado Interventor Militar en Cochabamba, y que luego de reunirse con los bloqueadores había establecido las bases de un acuerdo con ellos, una "orden superior" ignoró su autoridad cuando trato de detener el avance de una columna de carros de asalto y tropa fuertemente pertrechada que se dirigía a la zona de bloqueo. El primer reporte difundido por la prensa informó de 6 muertos y 3 heridos, todos en el lado campesino (LT: ; 30.1.74).

Antes de la "batalla" contra los "agresores internacionales " un comunicado del Comando divisionario del ejército informo que el Gral. Pérez Tapia, que en esos momentos negociaba con éxito la suspensión del bloqueo, había sido tomado como rehén, con lo cual los campesinos habrían culminado así "sus actos de provocación y torpeza". En ese

mismo comunicado se daba a conocer a la opinión pública la iniciación de un "operativo militar de carácter disuasivo" (LT; 30.1.74). En otro comunicado dirigido a los campesinos, y que probablemente éstos nunca conocieron, se afirma que "el gobierno no quiere más perjuicios para el campesino que debe volver a su tierra a trabajarla, a la cosecha de los productos que debe vender para poder vivir" (ibid).

Mientras el supuesto rehén llegaba a la ciudad cargado de indignación y sorpresa, la columna militar despejaba al bloqueo de Tolata, que era donde se había concentrado mayor número de campesinos convocados para dialogar con el enviado presidencial, dejando "montones de cadáveres de campesinos amontonados como leña" según testimonio de un soldado presente en el lugar (APDHB 1979; 26). Tres horas más tarde, caída ya la noche, las "órdenes terminantes e irreversibles" volvieron a cumplirse en la zona de Epizana. La cifra de muertos y desaparecidos se incrementó a un mínimo de 70 a 80, aunque en círculos militares llegó a hablarse confidencialmente hasta de 200 bajas (APDHB 1979; 36).

Al día siguiente, 30 de enero, arribó a Cochabamba un nuevo Comandante de Zona Militar con la "terminante decisión de imponer el principio de autoridad en el país", según sus palabras (LT; 31.1.74). Ese día fueron despejadas las restantes carreteras.

FOTO NUMERO 3

"Las Fuerzas Armadas se sienten satisfechas de haber podido, gracias a la comprensión de todos, salvar una situación por un mínimo de contratiempos y comprometen una vez más su empeño de identificarse con las legítimas aspiraciones de todos los bolivianos y sus creencias de que la paz sólo puede ser el resultado de la justicia", señaló el comunicado con el que la VII División de Ejército, acantonada en Cochabamba, daba por concluidos los operativos militares de "disuasión" (LT; 1.2.74).

Ese mismo día se publicaron otros pronunciamientos como el de la Federación de Empresarios Privados, que "repudia los actos subversivos y terroristas". Y de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos que señaló el origen del conflicto en la "confusión ideológica", declarando que "con el imperio de la ley de la oferta y la demanda, los productos agropecuarios encontrarán su precio justo".

Entre tanto, el Sindicato MANACO se encontraba en huelga de 48 horas protestando por la "masacre de Tolata"; el FPN donaba una partida de medicamentos para los heridos hospitalizados en la ciudad; y la COMIBOL continuaba negociaciones con la Federación de Mineros que recibía adicionalmente, de parte del Ministerio de Trabajo, promesas de importantes beneficios colaterales. Los días siguientes la prensa continuó registrando noticias semejantes. Paros laborales en protesta por la política económica y solidaridad con los campesinos del Valle cochabambino; ofrecimientos gubernamentales de ampliar a todos los fabriles los beneficios colaterales ofrecidos a los mineros; detenciones de dirigentes campesinos y autoridades provinciales; y numerosos "pronunciamientos campesinos" respaldando al gobierno y lamentando el trágico equívoco de sus hermanos del Valle.

EL 14 de Febrero fueron retirados del gabinete los Ministros del Interior y de Asuntos Campesinos y el 8 de marzo, en una "concentración campesina" realizada en la Base Aérea Militar de Cochabamba, el Presidente Bánzer hizo pública entrega de 25 tractores y 1000 arados metálicos a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos (que para entonces fueron fundidos en uno solo), para que los entreguen en forma "gratuita" a los agricultores a través de cooperativas que deben formar con asistencia gubernamental. Salvo el Canciller del Arzobispado de Cochabamba, todos los oradores fueron militares. Incluso el encargado de agradecer al Presidente "a nombre de los campesinos"; Cap. Hugo Navia, Coordinador del Pacto Militar Campesino (LT; 9.3.74). Se había impuesto un nuevo equilibrio en el mercado, pero el conflicto había revelado nuevas determinaciones y contradicciones sociales en la región.

3. De la crisis de mercado al conflicto político

Las tomas de tierras al comenzar la revolución nacional aceleraron la expansión del campesinado parcelario que luchó duramente para ser tal, y que en su lucha creció cuantitativamente como clase. El mismo proceso de reorganización del mercado fue posible por la participación activa de los sindicatos campesinos en la organización de las

ferias, la construcción de caminos y el crecimiento de la capacidad de transporte terrestre.

La parcela fue un triunfo del campesinado valluno. Su inseguridad individual generó la necesidad colectiva de buscar, en el poder "representante general de la sociedad", la garantía de conservación de su triunfo. En cierto modo se aferraron al Estado, y éste erigió su sistema de dominación basado en el apoyo del campesinado, incluso para desarrollar políticas objetivamente contrarias al interés de su conservación como clase. El Pacto Militar Campesino fue el instrumento central de esta relación, pero no la creó. Es decir el Pacto institucionalizó algo que ya existía, no fue una mera imposición del Estado. Por eso mismo es comprensible la magnitud y la profundidad de la protesta campesina en 1974: ella nació de la frustración y la decepción.

El Estado, sin embargo, no puede eludir el carácter contradictorio de su acción en la sociedad. La diversidad de fuerzas en el mercado, por ejemplo, exige su presencia en aspectos tales como el control de precios. Pero éste, si bien puede establecer un momentáneo equilibrio en el sistema de intercambios, acentúa la asimetría de los antagonismos propios del mercado confiriendo una potencial dimensión colectiva a los conflictos que subyacen en todo acto de cambio de valores, precisamente porque esa presencia "general" rompe la percepción individualizada o particularizada de esos conflictos.

Esto es particularmente importante en situaciones de crisis de mercado. No se trata de tan sólo de que la política económica deteriore en forma inmediata la situación de un grupo social, sino de que el proceso de deterioro es de pronto evidenciado por una política estatal que, en este sentido, se limita a ser desencadenante de los conflictos.

Un estudio de la CEPAL (1982), luego de un minucioso análisis de los términos de intercambio del sector agrícola, afirma que el deterioro del poder adquisitivo del sector había sido la tendencia general desde los años 50 y que, por esa razón, podía considerarse que entre 1950 y 1975 dicho sector fue el soporte en que se apoyó el desarrollo económico boliviano. Esto, que es cierto para el sector, lo es más aún para el campesinado parcelario. El poder adquisitivo de la producción campesina, según el citado informe, se deterioró a un ritmo del 3.3 por ciento acumulativo anual entre 1963 y 1976

(CEPAL 1982; 148), lo cual representaba un intenso proceso de transferencia de excedentes.

No hace falta, pues, que el deterioro sea bruscamente acelerado por la política económica, e incluso puede darse que en ciertos casos ésta mejore la situación inmediata del productor. Es importante lo que ocurre, pero también cómo ocurre, pues eso está determinado por todo el proceso social, económico y político previo. Las percepciones individuales del deterioro se colectivizan con medidas generales. Antes de la aplicación de la política, el campesino parcelario podía creer que la pauperización era un proceso que sólo le afectaba a él y a nadie más puesto que él y nadie más es el responsable de su parcela, pero cuando la acción estatal se produce tiene la oportunidad de comprobar que eso no es cierto, que su reacción es compartida y es similar a la de otros, que no está solo. En el conflicto pone a prueba, incluso, su concepción del proceso que ha vivido y está viviendo.

En 1974, por ejemplo, es cierto que el campesinado de los valles sintió más el impacto de las medidas porque faltaba poco para la época de cosecha y sus reservas se agotaban (Lanneuille 1980; 98), pero creemos que sus motivaciones más profundas se encontraban en el hecho de que durante el gobierno de Bánzer se hizo más visible la contradicción entre su inserción en el sistema político y el trato que recibía del Estado en lo económico. En ese sentido, el movimiento buscó poner a prueba el Pacto Militar Campesino a fin de recuperar en hechos la letra del mismo o, por lo menos, definir su contenido.

En el contexto de un persistente deterioro económico, la reorganización sindical campesina en los valles incorporó a un conjunto de nuevos dirigentes, la mayor parte de ellos jóvenes y con estudios superiores, que seguramente contrapesaron la visión y la práctica clientelar de los antiguos poniendo al mismo tiempo en duda los mecanismos institucionales que ellos empleaban en su relación con el Estado.

No es casual que el primer ampliado departamental de dirigentes realizado después del Congreso de Paracaya, el 19 de enero de 1974, ratificara con mayor vigor aún las conclusiones de aquél asumiendo incluso actitudes desafiantes frente al gobierno: se

hablaba de ponerle plazos amenazando con medidas de hecho y se criticó fuertemente la costumbre del gobierno de pagar sueldos a algunos dirigentes (LT; 20.1.74).

Para los observadores de la prensa, tanto las conclusiones del Congreso como las del Ampliado pusieron "en riesgo inminente la vigencia del Pacto Militar Campesino" (LT; 23.1.74).

No parecía ser, sin embargo, intención de los campesinos romper su alianza con los militares. Con gran sentido táctico trataban de diferenciar, en todo momento, al gobierno del ejército. La crónica periodística ya citada sobre las conclusiones del Ampliado señalaba que "al no prosperar ninguna de las iniciativas propuestas por los dirigentes campesinos, les ha hecho suponer que el Ministerio de Industria y Comercio y el propio Gobierno protegen los intereses de los importadores y no abrigan el propósito de atender a la aplicación de medidas que favorezcan a la familia campesina, por eso ellos conminan a las Fuerzas Armadas como instrumento de poder real a influir en el Gobierno para escuchar y atender en la vía práctica las recomendaciones del Congreso de Paracaya" (LT; 23.1.74 subrayados nuestros).

Ya cuando el conflicto había comenzado en Quillacollo y los bloqueos empezaban en el Valle Alto, los campesinos pidieron públicamente la "movilización de las Fuerzas Armadas para reprimir el contrabando", que había sido señalado como el motivo por el cual el gobierno aumentaba los precios (LT; 25.1.74).

En casi todas las reuniones con los ministros y los interventores militares, los dirigentes repudieron a los "políticos" y al Frente Popular Nacionalista, acusándolos de ser los exclusivos responsables de la situación, pidiendo mayor intervención de las Fuerzas Armadas y un diálogo directo con Bánzer, encarnación de éstas y del Estado (LT; 25, 26, 27, 29 y 30.1.74). Aún en medio del conflicto, el máximo dirigente de Cochabamba, Ciriaco Guzmán, informaba a la prensa que su Federación exigía la revisión y modificación de los decretos, para lo cual designaría "representantes de base para que de acuerdo al Pacto Militar Campesino participen en la redacción de los nuevos decretos" (LT; 29.1.74). Los campesinos estaban convencidos de que la razón estaba con ellos. Esto era tan evidente que, según el último negociador, el Gral. Juan Pérez Tapia, habían acordado levantar automáticamente los bloqueos en cuanto Bánzer llegara a dialogar con

ellos. Los testimonios recogidos por la Asamblea de Derechos Humanos señalan que incluso hasta el último minuto, cuando ya el convoy militar se acercaba al bloqueo de Tolata, los campesinos creyeron que en él venía el Presidente (APDHB 1979, 25 y 26).

Todo esto demuestra que para los campesinos del valle de Cochabamba, el Pacto Militar Campesino tenía su razón de ser, su utilidad práctica y real. Les hubiera bastado, sin embargo, observar la actitud de los Jefes militares para darse cuenta de que, para ellos, el Pacto no era sino un instrumento de manipulación política.

En efecto, salvo la actitud de algunos oficiales a quienes se acusó luego de haber promovido el levantamiento, la actitud general en el gobierno y el ejército fue de desprecio y rechazo a los campesinos. Suponiéndolos una masa inmadura e intelectualmente infradotada, en la mayor parte de las declaraciones y comunicados oficiales del gobierno y las Fuerzas Armadas se trató el problema como si hubiera sido creado por "agitadores profesionales" o por unos pocos extremistas interesados en perjudicar al gobierno. El mismo Bánzer, a tiempo de anunciar el Estado de Sitio y la inminencia de la "batalla" y seguramente satisfecho de su paciente comprensión, los mencionó como "sorprendidos en su buena fe" (LT; 29.1.74).

FOTO NUMERO 4

Abundaron también declaraciones oficiales que tipificaron los bloqueos como "actitudes de borrachos". El Comandante del Ejército hizo gala de su capacidad de deducción para demostrar, a partir de esta burda acusación, que detrás del conflicto se agitaba una gran conspiración internacional. Un diario recogió sus palabras: "Las Fuerzas Armadas -dijo-, no han querido meterse a dialogar con los campesinos porque éstos est n

en estado de ebriedad continua. Los campesinos no están en condiciones de poder embriagarse seis días seguidos como ocurre en el presente, porque no tienen dinero para consumir chicha. Los campesinos, de acuerdo a sus medios económicos, se embriagan cada fin de semana o cada quince días y precisamente es en este campo que las Fuerzas Armadas han detectado que está corriendo mucho dinero en el Valle" (PR; 29.1.74). Con tales declaraciones, es posible suponer incluso que el general se entretuviera calculando la cantidad de dinero que se requería para pagar el consumo de chicha en volúmenes suficientes como para mantener ebria durante seis días a una masa de 20.000 personas, una vez de pensar que en sus propias incoherencias podía encontrar las razones inmediatas del conflicto.

Sólo después de que la masacre se hubo producido, Bánzer recuperó el tono paternal en su mensaje a los campesinos del valle. Luego de acusar a los "comunistas" por haber "trancado los caminos" impidiendo el diálogo directo (!), decía " les hablo por la radio, para que sepan directamente por mí, que las medidas económicas no están contra ustedes (...). Tengan confianza en el gobierno, porque es el único que puede darles a ustedes lo que ustedes piden, y sepan que yo los defenderé en todo momento" (LT; 1.2.74).

Todo muestra que en enero de 1974 los campesinos apelaron a su pacto con los militares e intentaron revitalizarlo durante el conflicto, porque creían en él, pero encontraron una respuesta que sí los "sorprendió en su buena fe" y que costó vidas y sangre.

Ahí comenzó a resquebrajarse no sólo la base social del gobierno, que ese mismo año se vio obligado a recluirse aún más en la violencia, sino el mismo edificio del Estado cuya estabilidad se tornó aún más precaria.

La autonomía sindical ha sido, desde entonces, una reivindicación constante del campesinado, y ella alertó la nueva organización que en 1979 emergió con tanta fuerza.

Es notable, sin embargo, que en 1974 la acción de las bases sobrepasaba las decisiones de su dirigencia. La mayor parte de los dirigentes que encabezaron los bloqueos fueron después liberados al comprobarse que "fueron obligados por sus sindicatos a asistir a las manifestaciones contra el gobierno" (LT; 8.2.74). En ese momento las bases forzaron todo el aparato institucional porque dudaban de su capacidad para representarlos.

Es importante también destacar la persistencia de una memoria populista en el campesinado, sobre todo en la exigencia de un contacto directo de la masa con el líder, con "el poder" (Raby s.f.).

Este comentario requiere ser ampliado en dos direcciones:

Por un lado, es cierto que en la relación líder-masas que establece el populismo hay también la reproducción de una suerte de modelo paternalista que, considerado en su más abstracta dimensión, tenía una larga tradición en el sistema de hacienda prevaleciente en los valles de Cochabamba hasta la Reforma Agraria de 1952. La crisis de mercado, al poner en evidencia las nuevas características del intercambio y la frágil situación de los pequeños productores, estimula en éstos lo que Thompson llama la "reconstrucción selectiva del modelo paternalista" (1979; 89). Es decir, la acción de protestar frente a la crisis del mercado --que en el caso analizado adquirió dimensiones de conflicto social--, tendría una de sus motivaciones inmediatas en una suerte de rebelión contra el cambio, (2) representado en este caso por la mercantilización. No es casual que en el centro de la disputa estén las demandas sobre fijación de precios. Sólo que, sobre la base de la relación campesinado-Estado que se había desarrollado a partir de 1952, los levantamientos populares no se circunscribieron a acciones en el mercado (fijar precios, castigar especuladores, expropiar acaparadores, etc.) sino que fueron planteadas como exigencias al Estado, supremo árbitro de los conflictos y protector del pueblo.

Por lo tanto, la rebelión tuvo inicialmente canales institucionales para expresarse, y en su caso negociar con el gobierno, al que se percibía más como un aliado que como un adversario.

Este hecho muestra la complejidad de las estructuras clientelares, que deben ubicarse adecuadamente en el difícil juego de representar, al mismo tiempo, a las bases y al gobierno, dependiendo precisamente de ese hecho su reconocimiento por unas y otro. En efecto, analizando los problemas de la organización campesina en el país, es notable observar que la mayor parte de las organizaciones de nivel superior tuvieron un origen cupular, encontrando luego sus bases de apoyo(3). Ello se explicaría porque éstas, en su búsqueda de reivindicaciones muy concretas e inmediatas, se vinculaban con aquella dirigencia que demostrara ser capaz de obtener respuestas a tales reivindicaciones. A su

vez, ésta "capacidad" de la dirigencia dependía de que fuera reconocida como interlocutora válida, es decir, representativa y capaz, por su parte, de movilizar o controlar su base supuestamente adscrita. Típicamente, podría decirse que la organización campesina de nivel superior se constituía en torno una cúpula dirigencial (poseedora de una mínima red de dirigentes medios), que iba adquiriendo legitimidad en la medida en que lograba ubicarse como intermediaria entre el gobierno y el campesinado, a los que no solamente comunicaba sino también representaba. Mientras más representara al Estado ante las bases, mejor podría representar a éstas ante el Estado y viceversa. Tan difícil juego fue ensayado también por García Meza y por Torrelio, cuya precariedad e incapacidad para generar respuestas fue, justamente, lo que impidió reconstruir un sindicalismo campesino clientelar y dependiente. Y es que, de hecho, incluso éste se asienta sobre una conciencia de sus límites y posibilidades, y no sobre la pura alienación, cooptación o enajenación.

Por otro lado, aunque evidentemente jugó un papel fundamental en la localización del conflicto la tradicional vinculación directa del campesinado valluno con el gobierno, es también cierto que la situación de dictadura prevaleciente impidió una irradiación mayor del conflicto y, al reforzar su aislamiento, posibilitó su resolución violenta.

Otro aspecto que creemos debe ser puesto de relieve es el hecho de que en este conflicto hay indicios suficientes como para permitirnos afirmar que en la base del mismo estaba una conciencia muy clara en los campesinos sobre los términos de su inserción en el proceso económico y en el sistema político.

En 1974, los campesinos que pidieron incluso la Vicepresidencia y ministerios "por ser mayoría" (LT; 20.1.74), intentaron restablecer el Pacto Militar Campesino porque creían que ese canal de relación con el Estado (clientelar, paternalista, subordinante, como se quiera) representaba sin embargo una fórmula realista de participación social y política, la cual garantizaría una acción de defensa y protección de sus intereses colectivos como pequeños productores de mercancías y campesinos propietarios de parcela.

Está claro que los campesinos, por un lado sentían y percibían el deterioro de su economía familiar al mismo tiempo que el mercado les enseñaba cuán importante era su actividad productiva para el abastecimiento urbano. Por otro lado, se sabían y se sentían

mayoría y se negaban a aceptar que la política estatal ignorara sus necesidades. Con matices y diferencias, la movilización campesina estuvo orientada a redefinir su participación en la sociedad nacional y en el sistema político, de modo que su presencia correspondiera de mejor manera a su importancia en el plano económico.

Así, pese a que el conflicto tuvo una motivación inmediata de tipo económico, no permaneció exclusivamente en ese campo. Y aunque es cierto que el hecho mismo de que el conflicto trascienda los límites de la fábrica, el taller, la finca, le otorga ya dimensiones políticas, debemos reconocer que en el caso estudiado éstas no fueron meras adquisiciones debidas a la extensión del conflicto, sino que los actores del mismo la plantearon de manera más o menos explícita. La participación en el sistema de decisiones fue un elemento motivador central, que aunque era parte del discurso autoritario, nunca lo fue sinceramente. El Pacto fue desigual también porque los pactantes tenían intenciones diferentes.

Cochabamba, Noviembre de 1982

FUENTES PERIODISTICAS

LT; "LOS TIEMPOS", Diario de la mañana editado en Cochabamba, circulación nacional.

PL; "PRENSA LIBRE", Diario matutino editado en Cochabamba, circulación nacional.

PR; "PRESENCIA", Cotidiano, perteneciente al Episcopado boliviano. Editado en La Paz, tiene circulación nacional.

NOTA: En las citas y referencias, luego de la abreviatura se especifica día, mes y año respectivamente.

BIBLIOGRAFIA

APDHB (Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia):

1979 LA MASACRE DEL VALLE, Ed. APDHB. La Paz

ARANIBAR, Ernesto

1978 CRECIMIENTO ECONOMICO Y PROCESOS

POLITICOS. Ed. Los Amigos del Libro. Cochabamba.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

1981 MEMORIA ANUAL. La Paz.

1982a INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR.

Anuario 1982. La Paz.

1982b INDICADORES ECONOMICOS, N° 3, La Paz.

1983 BOLETIN ESTADISTICO 247, La Paz.

BLANES, José

1982 Clases sociales, poder político y estrategias de desarrollo. CERES. Ms.

CEPAL

1982 CAMPESINADO Y DESARROLLO AGRICOLA EN BOLIVIA. División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. Santiago de Chile.

DANDLER, Jorge

1984 EL SINDICALISMO CAMPESINO EN BOLIVIA. Ed. CERES, Cochabamba.

FLORES, Gonzalo

1982 Estado, políticas agrarias y luchas campesinas: revisión de una década en Bolivia (Ms) CERES La Paz.

INE (Instituto Nacional de Estadística)

1978 ESTADISTICAS REGIONALES. Cochabamba.

- 1983 RESUMEN ESTADISTICO. La Paz.
LANNEUVILLE, Diego
1980 El Movimiento Campesino en el Valle Alto de Cochabamba (1971 - 1974) (Ms).
LASERNA, Roberto
1980 EL "ESTADO" BOLIVIANO 1971 - 1978 (economía y poder)
Ed. IESE. Cochabamba.
LAVAUD, Jean Pierre
Los campesinos bolivianos contra el Estado: del rechazo del impuesto único hasta la oposición de los "decretos del hombre"
(1968 - 1974) (Ms).
MARX, Karl
1978 EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE.
Ed. en lenguas extranjeras. Pekín.
PRUDENCIO, B. Julio
1981 Producción campesina y abastecimiento alimenticio (trabajo preliminar) CERES MS.
RABY, David L.
s.f. POPULIS: A MARXIST ANALYSIS
Université Mc Gill. Montreal.
RAMOS, Pablo
1980 SIETE AÑOS DE ECONOMIA BOLIVIANA
Ed. Universitaria. La Paz.
1982 LA CRISIS DE LA POLITICA ECONOMICA
Ed. Espartaco. La Paz.
RIVERA, Silvia
s.f. Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento "Katarista" 1970 - 1980. (Ms).

WOMACK, J. John

1982 ZAPATA Y LA REVOLUCION MEXICANA

Ed. Siglo XXI. México.

Han pasado dos décadas desde que se produjo el trágico equívoco que culminó con la masacre del Valle. Al publicar este breve estudio de aquella coyuntura, el CERES no tiene otra intención que la de contribuir a mantener viva la memoria colectiva de los bolivianos. No para juzgar el pasado ni a sus protagonistas, sino para comprenderlo mejor y aprender de los errores que cometimos.

Es de esperar que esta publicación estimule la realización de nuevas investigaciones sobre aquellos hechos, y provoque en sus protagonistas la necesidad de difundir su versión sobre los mismos. Nunca ganaremos el futuro si sentimos temor a enfrentar nuestro pasado.

Hace treinta años se formalizó e institucionalizó el Pacto Militar Campesino, prolongando y concentrando una alianza que dominó el espacio político boliviano desde los años de la Reforma Agraria. La alianza entre el campesinado parcelario y la burocracia estatal, concentrada desde 1964 en los estamentos militares.

Ha pasado, es cierto, mucho tiempo desde entonces. Pero tampoco se han realizado nuevos estudios destinados a esclarecer la compleja trama y las múltiples funciones de aquel instrumento político. Las referencias más frecuentes que tenemos acerca del Pacto provienen de estudios sobre el sindicalismo campesino, en los que sin embargo no se presta atención a la relación misma entre militares y campesinos.

Al publicar esta Historia del Pacto Militar Campesino no buscamos solamente satisfacer una curiosidad histórica, sino también contribuir a la reflexión sobre los desafíos de la participación y las dificultades de un relacionamiento excluyente y desigual entre sectores de la sociedad y el Estado. Una reflexión sin duda fundamental para la democracia que seguimos empeñados en construir.

- LASERNA, Roberto
 1980 EL "ESTADO" BOLIVIANO 1971 - 1978
 (economía y poder)
 Ed. IESE. Cochabamba.
 LAVAUD, Jean Pierre
 Los campesinos bolivianos contra el Estado: del
 rechazo del impuesto único hasta la oposición de
 los "decretos del hombre"
 (1968 - 1974) (Ms).
 MARX, Karl
 1978 EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE.
 Ed. en lenguas extranjeras. Pekín.
 PRUDENCIO, B. Julio
 1981 Producción campesina y abastecimiento alimenticio
 (trabajo preliminar) CERES MS.
 RABY, David L.
 s.f. POPULIS: A MARXIST ANALYSIS
 Université Mc Gill. Montreal.
 RAMOS, Pablo
 1980 SIETE AÑOS DE ECONOMIA BOLIVIANA
 Ed. Universitaria. La Paz.
 1982 LA CRISIS DE LA POLITICA ECONOMICA
 Ed. Espartaco. La Paz.
 RIVERA, Silvia
 s.f. Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia:
 el movimiento "Katarista" 1970 - 1980. (Ms).
 WOMACK, J. John
 1982 ZAPATA Y LA REVOLUCION MEXICANA
 Ed. Siglo XXI. México.

- LASERNA, Roberto
 1980 EL "ESTADO" BOLIVIANO 1971 - 1978
 (economía y poder)
 Ed. IESE. Cochabamba.
 LAVAUD, Jean Pierre
 Los campesinos bolivianos contra el Estado: del
 rechazo del impuesto único hasta la oposición de
 los "decretos del hombre"
 (1968 - 1974) (Ms).
 MARX, Karl
 1978 EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE.
 Ed. en lenguas extranjeras. Pekín.

- PRUDENCIO, B. Julio
1981 Producción campesina y abastecimiento alimenticio
(trabajo preliminar) CERES MS.
RABY, David L.
- s.f. POPULIS: A MARXIST ANALYSIS
Université Mc Gill. Montreal.
RAMOS, Pablo
- 1980 SIETE AÑOS DE ECONOMIA BOLIVIANA
Ed. Universitaria. La Paz.
1982 LA CRISIS DE LA POLITICA ECONOMICA
Ed. Espartaco. La Paz.
RIVERA, Silvia
- s.f. Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia:
el movimiento "Katarista" 1970 - 1980. (Ms).
WOMACK, J. John
- 1982 ZAPATA Y LA REVOLUCION MEXICANA
Ed. Siglo XXI. México.